

■ PLAZA DOMINICAL

Miguel Ángel Granados Chapa

Partidos reincorporados Pemex, para la nación

La política de desincorporación de entidades públicas, que tan exitosa ha sido para desmantelar el Estado, sufrió un serio revés ayer, cuando quedó claro que partidos paraestatales que habían dejado de serlo recobraron su nunca perdida del todo vocación, y volvieron al seno del gobierno, al que fueron alegremente reincorporados a pesar de que la reunión del Zócalo donde tal reencuentro se produjo, fue también citada para demandar la libertad de los presos políticos petroleros, es decir, los malandrines puestos en la cárcel por el presidente Salinas.

PLAZA DOMINICAL

Viene de la 1

Fue siempre frágil la unidad de los partidos inventados y apoyados por el gobierno, en torno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero el de su alianza era un juego en que todos ganaban, como quedó claro el seis de julio. Todavía en el Colegio Electoral y los primeros meses de la nueva legislatura se apreciaron acciones conjuntas. Pero, primero la constitución de un grupo parlamentario de la Corriente Democrática y después la convocatoria a formar el Partido de la Revolución Democrática, dieron oportunidad a los paraestatales, especialmente al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN, el *ferrocarril*, para vestirse de nuevo con sus antiguos atuendos. Es preciso recordar, sin embargo, que ya en la elección local de Tabasco, que tantas expectativas suscitó, el PFCRN prestó invaluable servicios al gobierno, al apresurarse a reconocer, y beneficiarse con ello, el triunfo de los candidatos priistas en aquella entidad.

El papel del *ferrocarril* como saboteador del cardenismo cuyo nombre usufructúa, fue delinándose con mayor nitidez al acercarse la hora de constituir localmente los frentes opositores en Baja California y en Michoacán. Pero habría de llegar el 18 de marzo para que se despejara por completo las dudas sobre su conducta. Todavía el viernes 17 Rafael Aguilar Talamantes acompañó al ingeniero Cárdenas y a su señora madre, doña Amalia Solórzano viuda de Cárdenas, al acto de la Comunidad Politécnica Democrática. Aunque entonces ya quedaba claro que las antiguamente aliadas fuerzas que el año pasado recordaron juntas la expropiación petrolera lo harían esta vez por separado, en Jiquilpan el ex candidato presidencial y en el Zócalo el *ferrocarril* y el Partido Popular Socialista, Aguilar Talamantes se reservaba una sensacional carta en la manga.

Sólo ayer mismo, en la mañana, dio la sorpresa a sus propios militantes: había resuelto invitar al PRI a que enviara una representación y un orador al mayor acto celebratorio del cardenismo. La razón aducida para el giro de ciento ochenta grados fue que la batalla por la deuda externa demanda la unidad de los mexicanos, y hace nociva la división entre priistas y antipriistas. Con ello estaba implicando la aparición de una tercera categoría que ese partido quiere protagonizar, la de quienes no son priistas ni antipriistas sino todo lo contrario.

Tal acto de concordia, en abstracto, hubiera podido ser signo de civilidad y de madurez política. Pero con su historia a cuestas, y en las circunstancias presentes, esos partidos no consiguieron que siquiera los pocos asistentes a la reunión del Zócalo les siguieran, cuando pidieron recibir al participante priista con respeto y cordialidad. Por lo menos en tres ocasiones similares el año pasado, en el mismo lugar y ante los mismos dirigentes, quienes acudían al mitin de ayer, habían sido instados a luchar contra el partido a cuyo personero ahora se les pedía recibir solidarios. Buena parte de los asis-

PARTIDO DEL FRENTE SALINISTA ■ Helguera



tentes no lo hizo, y asestaron rechiflas y abucheos a Manuel Jiménez Guzmán, oficial mayor de la CNOP, quien fue a bailar con la muy fea de imponerse a una multitud hostil, al lado de dirigentes rebasados y dueños de una cara dura que ya hubiera querido Buster Keaton.

El PRI pasó por alto que el acto hubiese sido citado por el *ferrocarril* para demandar la libertad de los "presos políticos petroleros", lema que implica aceptar lo inadmisible para el priismo, y sumarse a una lucha contraria a las intenciones políticas del Ejecutivo, y resolvió comisionar al dirigente masónico, ex diputado federal y miembro de la Asamblea de Representantes, para que entrara como el profeta Daniel, en el foso de los leones. En el cálculo priista pesó más la gana de paladear el triunfo de opinión que significaría la rendición de antiguos adversarios, pero quizá debió tener presente que la obviada de su renovada vinculación con esos partidos, como se evidenció en el acto mismo, puede convertir esa en una victoria pírrica, tan costosa o irrelevante que se asemeja más a una derrota.

El gobierno, sin embargo, no cesa en su política de acercamientos y cooptaciones. El viernes, dio una nueva prueba de esa actitud, cuando se constituyó el consejo consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, encabezado por el ex embajador Carlos Tello, y en el que sobresale la presencia de miembros del PMS o el PSUM, como Julia Carabias, Rolando Cordera y Arturo Whaley, amén del líder del Partido Demócrata Mexicano, Víctor Atilano Gómez; Juan José Hinojosa, del PAN, y los empresarios Gilberto Borja y Carlos Slim, así como José Gallástegui, vicepresidente de Televisa, a todos los cuales, y al resto de los componentes del Consejo, podemos suponer acordes con

el discurso de Tello, que instó a "extremar la revisión crítica de nuestras políticas e instituciones, al mismo tiempo que reafirmamos la voluntad de luchar por la justicia social".

Alianzas del gobierno con antiguos impugnadores no son ajenas a un sistema democrático, ni entrañan deposición de criterios propios en uno y otros. Y hasta pueden suscitar resultados fructíferos, como lo evidenció el modo en que, por lo menos en el corto plazo, se transitó en el sector eléctrico de una situación que afectaba adversamente al sindicato más antiguo del país, a otra que puede beneficiarlo. El 15 de marzo, en efecto, 13 meses después de que durante su campaña electoral el candidato priista Carlos Salinas fue recibido por dirigentes del SME en Necaxa, el sindicato aceptó un incremento salarial del 12 por ciento a cambio de un compromiso trascendental: la supresión del frágil estado de liquidación en que había sido colocada desde 1974 la empresa con la cual contrata, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y la oferta de crear un nuevo organismo público. Para ello será preciso emprender las reformas legales pertinentes, que aseguren la pervivencia del SME, cuyos miembros más de una vez vieron abiertas las fauces del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, listas para manducarse a la organización democrática que por ahora ha quedado a salvo.

Es preciso subrayar el *por ahora*, ya que precisiones inmediatamente posteriores de la Comisión Federal de Electricidad indican que se buscará someter a reajustes al personal de la Cía de Luz, y reducir el volumen y la calidad de sus prestaciones antes que crear el nuevo organismo. Pero eso será materia de otra de las muchas batallas libradas por el

SME desde su fundación el 14 de diciembre de 1914. Creada a su vez por inversionistas canadienses a principios del siglo, la Mexicana Light and Power fue a lo largo de más de medio siglo el símbolo exacto de la expoliación a que el capital foráneo somete a las colonias en que opera. Por ello, el SME se templó en la lucha contra intereses desaforados, a los que arrancó pacientemente condiciones de trabajo que ahora son juzgadas onerosas y contrarias a la productividad. Adquirida por el Estado en 1960, salvo un dos por ciento de acciones que aún permanecen en poder de particulares, extranjeros, la CLFC es la única empresa con estructura de sociedad mercantil y beneficiaria de una concesión que subsiste, pues la reforma constitucional de 1960, más la ley respectiva de 1975, confieren a la Nación exclusivamente, a través de la CFE, la capacidad de generar y distribuir energía eléctrica. De allí que, en efecto, la Compañía de Luz no pueda ni deba prevalecer, por lo que crece el valor del esfuerzo de sus trabajadores organizados, mediante el cual se haya conseguido su conversión en un nuevo órgano público, cuyas características deberán definirse teniendo presentes los intereses del gremio que contribuyó a su gestación.

Distinta de su alianza con los líderes del SME es la que el gobierno ha establecido con los jefes petroleros, porque aquéllos deben su representación a la voluntad de los dirigentes, mientras que en el sindicato petrolero el propio gobierno estableció las bases para el arribo de la nueva dirigencia. Esta parece esperar todo de esa vinculación, y ello le puede ocasionar sobresaltos, como el suscitado en la sección uno, la de Ciudad Madero, la plaza fuerte del procesado Joaquín Hernández Galicia. Allí, los quinistas pusieron a la dirección nacional ante un hecho consumado, que fue la elección de un nuevo secretario general, adicto a *La Quina*, Emilio Romero Espinosa. Es un grave revés para Sebastián Guzmán Cabrera, el normalista oaxaqueño al que se entregó la conducción sindical petrolera, y que ayer, por vez primera, fue figura relevante en la celebración oficial de la expropiación.

Allí confirmó el gobierno, en buena hora, sus compromisos ante el país respecto del carácter de Pemex. Considerada por su director, Francisco Rojas, como "prototipo de la empresa pública", se subrayó que su privatización o fraccionamiento "son mentiras que resultan de intereses faccionales o de dogmatismos inaceptables". Como consecuencia de ello, Rojas hubo de declarar que "no hay ni ha habido propósito alguno de privatizar la función de Pemex o fraccionar su estructura; tampoco renunciará el Estado a la exclusividad de la explotación de la petroquímica básica; en ello no daremos ni un paso atrás".

Todo lo cual hubiera provocado gran satisfacción en el antiguo director general de esa empresa, don Jesús Reyes Heróles, muerto en un día como hoy, hace ya cuatro años.